34/35:37

08753

PODER EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA
DESPACHO GENERAL

ANTECEDENTES
SOBRE LA REGLAMENTACION LEGAL
DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

BUENOS AIRES
1958

Foll. 34/35
1

INV	008713
SIG	Foll 34/35:37
LIB	1

ANTECEDENTES
SOBRE LA REGLAMENTACION LEGAL
DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

15137

**DECRETO DE CREACION
DE LA COMISION ASESORA (Nº 3.218/56)**

Buenos Aires, 25 de febrero de 1956.

VISTO:

El texto del artículo 28 del Decreto-Ley Nº 6.403 sobre organización del régimen universitario y la proposición del Secretario de Estado en el Departamento de Educación, y

CONSIDERANDO:

La necesidad de dar las normas legales sobre la existencia de las universidades libres y de consultar previamente el parecer de los entendidos mediante la constitución de una comisión especial que, a su vez, requiera y tome en cuenta las diversas sugerencias sobre el mismo tema;

El propósito del gobierno de contribuir de ese modo a asegurar un digno régimen de libertad para el mejor y más vasto desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza universitaria, sin desmedro del control que corresponda al Estado en todo lo que concierne a la salvaguarda del interés público,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina

D E C R E T A :

Artículo 1º — Créase una comisión con el objeto de asesorar al gobierno sobre la reglamentación legal de la existencia y funcionamiento de las universidades libres creadas por la iniciativa privada de acuerdo con lo que dispone el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 6.403 (1).

Art. 2º — Designase para integrar dicha comisión a los señores **BERNARDO HOUSSAY** (Cl. 1887, D. M. 2, Mat. 156.343, Céd. de Id. número 1.148.142), presidente; **EDUARDO BRAUN MENENDEZ** (Cl. 1903, D. M. 2, Mat. 251.829, Céd. de Id. Nº 301.387); **ALFREDO CASARES** (Cl. 1918, D. M. 2, Mat. 274.106, Céd. de Id. Nº 1.516.639); **VENANCIO**

(1) Decreto-Ley Nº 6.403, del 23 de diciembre de 1955.

Art. 28. — La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente.

DEULOFEU (Cl. 1912, D. M. 4, Mat. 505.911, Céd. de Id. N° 142.597);
EDUARDO HUERGO (Cl. 1902, D. M. 2, Mat. 164.586, Céd. de Id. número 146.562); TEOFILO ISNARDI (Cl. 1890, D. M. 2, Mat. 205.804, Céd. de Id. N° 1.502.799); LUIS F. LELOIR (Cl. 1906, D. M. 2, Mat. 216.927); JUAN T. LEWIS (Cl. 1898, D. M. 2, Mat. 214.182, Céd. de Id. N° 218.879); JAIME PERRIAUX (Cl. 1920, D. M. 2, Mat. 424.591, Céd. de Id. número 167.915); JORGE SABATO (Cl. 1924, D. M. 2, Mat. 4.213.794, Reg. 1, Céd. de Id. N° 2.198.313); JOSE MANUEL SARA VIA (Cl. 1903, D. M. 43, Mat. 2.276.323, Céd. de Id. N° 447.086); SEBASTIAN SOLER (Cl. 1899, D. M. 43, Reg. IV, Mat. 2.734.761, Céd. de Id. N° 232.178); y MAURICIO LUIS YADAROLA (Cl. 1895, D. M. 43, Mat. 2.741.931).

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.

ARAMBURU
A. Dell'Oro Maini

*DISCURSO RADIAL PRONUNCIADO POR EL
MINISTRO DE EDUCACION, DOCTOR ATILIO DELL'ORO MAINI,
EL 2 DE MARZO DE 1956 (1)*

La Junta Consultiva Nacional, a cuya última sesión concurrí espontáneamente para exponer el pensamiento del gobierno sobre la reorganización universitaria del país, me ha pedido que expusiera públicamente las ideas vertidas en esa ocasión y, particularmente, las proposiciones formuladas acerca del artículo 28 del decreto-ley Nº 6.403.

Mi exposición no tiene, pues, por objeto reseñar el debate de la Junta, sino, simplemente repetir en forma sintética el mismo pensamiento oficial que sobre esta materia satisfizo a sus honorables componentes. Debo declarar, en primer término, mi complacencia de ciudadano por el espíritu que animó las deliberaciones desarrolladas en un nivel de gran jerarquía, y el reconocimiento que debo a la benévola atención con que fui escuchado. Constituyen dichas deliberaciones un testimonio ejemplar de la unidad superior que vincula a los argentinos, dispuestos a deponer sus discrepancias, y a buscar, de común acuerdo, soluciones concretas y para todos satisfactorias, a los grandes problemas de la Nación.

El problema del gobierno sobre la recuperación de la Universidad, varias veces expuesto por quien habla, está fundado en el discernimiento de las causas que provocaron la crisis que, de largo tiempo, aquéllas padecen. No es necesario repetirlo en este momento. Desarrollé ante la Junta sus partes principales para destacar la misión encomendada a los señores Intervenores que representan en cada Universidad al gobierno de la Revolución Libertadora. Sus funciones se desenvuelven con plena normalidad y el proceso de reorganización de las Universidades se lleva a cabo en la más total solidaridad de todos los colaboradores con el pensamiento y la acción del Poder Ejecutivo.

El punto esencial de aquel programa consiste en lo que se ha llamado la autonomía de la Universidad. Desde hace más de

(1) La Revolución Libertadora y la Universidad. El problema universitario ante la Junta Consultiva Nacional. Pág. 166.

cincuenta años, el régimen universitario argentino se ha desarrollado dentro de un sistema de dependencia con el Estado que, según las circunstancias políticas, ha variado de grado y finalidad.

Durante mucho tiempo, ese sistema no tuvo otro objeto que sostener, en el orden jurídico, docente y financiero, la organización de un esfuerzo colectivo, dedicado al ejercicio de la enseñanza superior. Testimonio de este espíritu es la llamada Ley Avellaneda, cuyo escueto y sabio articulado bastó para mantener aquella dependencia en lo que era, según los tiempos, estrictamente necesario, y dejar a la Universidad un grado de autonomía, dentro del cual pudo desenvolverse de acuerdo con las modalidades de la época.

Sucesivas reformas no han modificado nunca este sistema, no obstante que la multiplicación de las Facultades y Universidades, así como su desarrollo y progreso, crearon un vasto y poderoso instrumento de cultura, cuyo gobierno, en verdad, no puede ser manejado con acierto sino por quienes tienen, por su vocación o por su experiencia la segura y exclusiva competencia.

Tenemos una reciente y dolorosa prueba de los extremos a que puede llevar la dependencia, convertida en servidumbre, durante el régimen abatido. La dictadura, bajo el argumento de realizar y asegurar la unidad de los argentinos, resguardándolos de la contradicción de las ideas mediante la imposición de una sola doctrina, asumió el pleno control de todos y cada uno de los actos de la Universidad, desde la designación de los profesores y la de sus autoridades, hasta la vigilancia de su comportamiento con relación a las imposiciones del partido dominante y a las exigencias de una adhesión incondicional a su jefe. El discrecionalismo del poder apretó, hasta sus últimas consecuencias, las redes de las leyes dictadas por la dictadura para concluir con todo vestigio de autonomía en la Universidad. Esta dura experiencia es una lección definitiva.

El decreto-ley dictado por el gobierno de la Revolución, se propone realizar la reconstrucción de la Universidad bajo el signo de la libertad, fuera del cual es imposible para aquéllas alcanzar su pleno desarrollo y total eficacia.

La inteligencia, y todo cuanto le concierne, no admite otras leyes que la de su propio ser, y necesita sustancialmente de la libertad. La Universidad, como institución, participa de esta exigencia. Una Universidad, es, esencialmente, una comunidad de profesores y de alumnos, constituida espontáneamente para el acrecentamiento de las ciencias, por la investigación de la verdad, y para la formación integral de la personalidad en el grado de la enseñanza superior. Es, por lo tanto, una agrupación de hombres, reunidos por razón de vínculos que nacen de su libre elección y para una actividad que proviene y vive de la inteligencia.

Nadie puede negar al Estado el derecho de promover, de crear y de organizar Universidades. Mas, en cualquiera de los casos, ya sea cuando las funda por sí mismo, proveyéndolas de los ingentes recursos que necesita; ya sea cuando controla su funcionamiento, en resguardo de los intereses del bien público, su intervención no atañe nunca a la vida íntima de la Universidad en cuanto tal, porque aquélla representa y es, una labor inalienable de la inteligencia, ajena por completo de los poderes del Estado.

Las relaciones del Estado con la Universidad, dependen, por consiguiente, del origen o de la razón de su intervención. Cuando aquella comunidad de esfuerzos nace de su acto creador y subsiste de su tutela, las relaciones están enderezadas a conservar la intención original y a regular las condiciones de apoyo. Cuando, en cambio, nace de la iniciativa privada y se sostiene a sí misma, esas relaciones sólo conciernen a la necesidad de vincular dicha iniciativa al bien común y resguardar sus exigencias por medio del ejercicio de los poderes de policía que tutelan aquel bien. Mas, lo que el Estado no puede, es monopolizar el ejercicio de las ciencias, impidiendo el natural florecimiento de la vocación colectiva para organizarse como lo estime más conveniente, en el cumplimiento de los fines de una actividad que le pertenece por derecho propio.

La concentración estatal de las Universidades, que en Europa siempre habían sido privadas, no proviene históricamente de un interés por su mejor funcionamiento o por el acrecentamiento de su labor específica, sino que es la obra absorbente de las monarquías absolutas del siglo XVIII o de las mayorías jacobinas de comienzos del siglo XIX con el fin de dominar las inteligencias y someterlas, coactivamente, a las verdades de que se creían depositarias. El sistema ha sobrevivido en la época contemporánea, particularmente en los países latinos, y es la causa del languidecimiento de las fuerzas creadoras del pensamiento colectivo.

La libertad permite que puedan coexistir y contrastarse diversas experiencias en la dramática aventura del saber. Cuando un grupo de personas se propone investigar la verdad, en sus diversos aspectos, orienta sus actividades, en las líneas principales, según los principios de grandes síntesis universales que comprenden y han sentido a las búsquedas y hallazgos parciales, y que a su vez son modificadas y reajustadas por estos descubrimientos. Se trata, pues, de totalidades funcionales, cuyas partes se incluyen recíprocamente, verdaderos universos culturales con sus leyes propias de estructuración y funcionamiento, producto de delicados ajustes y que, por lo tanto, no pueden depender de un planteo impuesto por nadie, ni Estado ni grupo, a cargo de otras

Universidades o institutos. Deben existir, para que funcionen con toda normalidad y para que produzcan sus maravillosos frutos, las posibilidades permanentes de que los investigadores de la misma orientación o con las mismas inquietudes, puedan agruparse libremente para trabajar en conjunto y formar sus discípulos y continuadores. De no ser así, las Universidades dejan de ser universos armónicos y dinámicos y se convierten en caos contradictorios y estériles.

En nuestro país, ha existido siempre, el reclamo de la Universidad libre, en todos los sectores, sin distinción. He mencionado en la Junta Consultiva, algunas de las más diversas iniciativas provenientes de todos los campos, que demuestran la existencia de un anhelo común y persistente. En la clara y unánime sugestión de todas ellas, se ha fundado la Revolución para acoger la Universidad libre en un decreto-ley. Es una concepción integral del problema, impuesta por las circunstancias del momento histórico en que vivimos.

La reorganización de la vida universitaria, después de la servidumbre de la dictadura, no es una obra de reordenamiento administrativo y burocrático. Debe alcanzar las entrañas mismas de la Universidad; operarse por dentro, en la integridad de sus fundamentos, de su estructura y de sus fines. No hay, para hacerlo, otra oportunidad como la presente, en la que se afronta bajo todos los aspectos, la recuperación de la auténtica Universidad. Por esas razones, el Gobierno Revolucionario ha dictado las normas que sobre organización institucional de las Universidades contiene el decreto N^o 6.403.

Analicemos, en primer término, las que se refieren a las Universidades oficiales. El artículo 1^o dice: "Las Universidades Nacionales se organizan y desenvuelven dentro de un régimen jurídico de autarquía. Tienen el pleno gobierno de sus estudios y la administración de su patrimonio conforme a las leyes respectivas y de acuerdo con los estatutos que cada una dicte para sí misma, según las modalidades de su tradición y las conveniencias de su ámbito local. Se dan a sí mismas la estructura y los planes de estudio que correspondan a la triple finalidad que las caracteriza en el orden de la profesión, de la investigación científica y de la universalidad de la cultura. Eligen y remueven a sus profesores, sin intervención del Poder Ejecutivo, y expiden los certificados de competencia, que corresponden a los estudios realizados en su seno."

El artículo 2^o, agrega: "Los órganos que ejercen normalmente el gobierno y la administración de las Universidades, es decir, los Decanos y Consejos Directivos de cada Facultad, y el Rector y Consejo Superior de aquélla, se constituirán conforme a los principios establecidos en las normas del presente decreto-ley".

La calificación de autarquía dada a este régimen, en lugar de la autonomía, según el vocablo corriente en los ámbitos generales, responde a la necesidad de precisar el significado de los términos jurídicos, lo cual en nada contradice la aspiración unánime de dar a la Universidad los medios legales de organizar su propia vida, para el cumplimiento de sus fines auténticos.

Distingamos para mayor claridad el valor de los términos: la autarquía, significa la capacidad de un organismo creado por el Estado, para darse a sí mismo las normas de su funcionamiento; la autonomía, en cambio, implica un poder constituyente por sí mismo, que no depende en su creación de ningún otro. De cualquier modo, no se debe hacer cuestión de palabras cuando lo que se trata es de conocer y entender la realidad. Esta realidad consiste en lo siguiente: todos los vínculos de orden legal, anteriormente existentes con el Poder Ejecutivo, para el funcionamiento de la Universidad, desaparecen en el nuevo régimen, de tal modo que todos y cada uno de los actos de aquélla, se realizan sin ninguna intervención del poder político.

El decreto-ley, da, exclusivamente, las normas constitutivas y estructurales del régimen, propias de la creación del organismo del Estado y destinadas a asegurar la adaptación de las funciones al cumplimiento de sus fines.

La obligación impuesta a la Universidad de respetar esas normas no contradice la autarquía que se le da, porque esas normas no se refieren a su funcionamiento, sino a su organización, sin la cual no podría existir. Son la ley misma de su creación que aseguran su estabilidad y dan cauce regular y permanente al libre desenvolvimiento de las diversas actividades. Sin ellas no habría autarquía, ni posibilidades de que existiera. Representan, además, la voluntad de la Nación, que da sus medios, sus recursos y su autoridad, para que subsistan y ponen en el Estado la responsabilidad de exigir su cumplimiento.

Esta responsabilidad no puede declinarse ni desplazarse a nadie. La ley sobre Universidades por consiguiente, sólo contiene los principios básicos de su organización institucional y las relaciones de su actividad con el Estado. El nuevo régimen, en definitiva, consiste en que, por la primera vez en la historia de la Universidad Argentina, ésta será íntegramente libre en el cumplimiento de sus funciones y tendrá plena responsabilidad de su destino.

El decreto-ley aludido instituye, en todo el país, el régimen de la universidad libre, aplicable tanto a las Universidades del Estado como a las nacidas de la iniciativa privada. Como dije antes, rompe todos los vínculos del gobierno con las Universidades oficiales. Estas pueden dictarse sus estatutos; establecer sus escuelas y Facultades; organizar sus planes de estudio; regir su gobierno y disciplina; elegir sus profesores; designar sus em-

pleados; constituir sus autoridades; administrar sus bienes propios; expedir títulos habilitantes; es decir, realizar la íntegra actividad de sus funciones sin intervención ni ingerencia del Estado. Son totalmente libres. Es decir, no habrá en la Argentina más que Universidades libres, divididas en dos categorías: la Universidad libre del Estado que recibe los dineros de la Nación, y la Universidad libre de la iniciativa privada que no los recibe. Es un sistema coherente, fundado exclusivamente en la naturaleza íntima y real de la actividad creadora del espíritu.

No se puede rechazar la una sin renunciar a la otra. Mucho menos se puede negar a la Revolución Libertadora la facultad de reconocer y acordar los fueros de la libertad al trabajo colectivo y solidario que emprende la inteligencia en la Nación, después de haber sufrido el oprobio de una dictadura.

El reconocimiento de dichos fueros no interfiere ni impide el cumplimiento de los deberes del Estado en lo que concierne a las normas generales y al control de los títulos habilitantes de aquellas profesiones que interesen al bien general de la colectividad.

El decreto-ley sólo contiene el principio, el reconocimiento de derechos. Su artículo 28 dice: "La iniciativa privada puede crear Universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente."

Con el fin de dictar esta ley reglamentaria, a que se refiere el artículo leído, el Poder Ejecutivo acaba de designar una Comisión compuesta por eminentes profesores y hombres de ciencia, cuya finalidad consiste en asesorarlo, después de recoger el parecer de los entendidos y las diferentes sugerencias de la opinión culta del país.

Nunca ha intentado el gobierno sustraer a las Universidades privadas de un régimen legal que asegurara el cumplimiento de sus fines de bien común, ni mucho menos dispensar los títulos que expidieren del control pertinente del Estado. En frecuentes ocasiones este tema fué aclarado, y en la sesión de la Junta Consultiva, después de referirme a los términos del decreto que crea la aludida Comisión, dejé asentadas con claridad las siguientes proposiciones que sintetizan el pensamiento del gobierno sobre esta materia:

1º) — La ley reglamentaria debe tener en cuenta la salvaguardia de los legítimos intereses del bien común y, particularmente, el respeto de las instituciones republicanas y democráticas que constituyen la base constitucional del Estado;

2º) — La misma ley debe tender a la constitución de Universidades auténticas y de gran valor científico que se encuen-

tren en condiciones de ofrecer a la cultura del país métodos y estructuras originales, capaces de acrecentarla y renovarla;

3º) — Las Universidades a que se refiere el artículo 28 se constituirán con los fondos que proporcione la iniciativa privada, y no podrán recibir subsidios o asignaciones del presupuesto del Estado;

4º) — Debe establecerse en la ley un procedimiento de control sobre el origen de los fondos que reciba la Universidad privada;

5º) — Los títulos habilitantes que expidan dichas Universidades para el ejercicio de profesiones que interesen a la salud o a la seguridad pública, definidas en la ley reglamentaria, serán sometidos, para su validez, al control y al examen de los órganos competentes del Estado.

Estas proposiciones espontáneamente ofrecidas por mí, porque representan el pensamiento originario e invariable del gobierno, fueron consideradas suficientes por los Honorables Consejeros que participaron en el debate y han de constituir la base de los trabajos encomendados a la Comisión designada.

De las consideraciones que acabo de exponer resulta que la única Universidad reglamentada y sometida a control será la llamada Universidad Libre, pues la oficial se desenvolverá sin ninguna norma de ese carácter. Debemos pues reconocer que este sistema nos coloca frente a una doble experiencia, igualmente nueva e interesante: la Universidad Oficial entregada a la comunidad de sus profesores, alumnos y egresados, sin control alguno del Estado; y la Universidad Privada, sujeta a un régimen de vigilancia y control.

Afirmamos, por lo tanto, ya para terminar, que la innovación más importante y trascendental es la que se refiere a la organización de la Universidad Oficial.

Tengo plena confianza en que las opiniones concordantes, expuestas el otro día en el seno de la Junta Consultiva y esta explicación, que a su pedido acabo de realizar, han de despejar el juicio de la opinión planteando el tema en su verdadero terreno.

Las divisiones y contradicciones se han producido por razones ajenas a la naturaleza del tema. La Universidad libre no tiene nada que ver con el problema de la enseñanza religiosa. Ella no constituye un problema confesional. Aunque existiera en el país aquella enseñanza, tendríamos planteada la misma cuestión de la Universidad libre. Y si la oposición proviniera de la posibilidad de que la Universidad privada se constituyera bajo un signo confesional, nos encontraríamos con el problema llevado a un terreno diferente, ajeno a su naturaleza, pues aparte de que resulta inexplicable de que por aquella circunstancia se vuelvan confesionales las ciencias profanas, nos hallaríamos frente a una repentina y

Lo que está por resolver es la aceptación de mi renuncia, cuya copia adjunto, (1) y la contestación al pedido formulado por la Comisión.

Me es grato saludar a usted con mi consideración más distinguida.

Bernardo A. Houssay

(1) Señor Ministro Interino de Educación

Ingeniero Luis Igartúa

S/D.

Presento a usted mi renuncia de miembro y presidente de la Comisión Asesora designada para reglamentar el artículo 28 del decreto-ley N° 6.403.

Al reunirse por primera vez la comisión, hice presente al señor Ministro que estimaba que era mejor dejar la resolución de este asunto a las futuras autoridades constitucionales después de someterlo a un amplio debate público.

Declaré que si nuestras funciones se limitaban a reglamentar el artículo 28, renunciaba a formar parte de la comisión. El señor Ministro manifestó entonces y lo reiteró más tarde, que la comisión tenía completa libertad de proponer cualquiera opinión o proyecto, el cual daría lugar a un decreto-ley especial.

La opinión pública está completamente confundida ante las propagandas contradictorias y deformadas que se hacen. La libertad de enseñanza está consagrada por la Constitución y han existido Universidades, Colegios libres superiores, Comisiones por la Universidad libre y autónoma e Institutos privados de investigación. Esa libertad sólo fué restringida por el gobierno depuesto.

Los principales problemas a aclarar son: 1º) Si deben llenarse condiciones para que una institución se llame Universidad; 2º) Si sus diplomas son títulos habilitantes con o sin examen de Estado; 3º) Si para ello deben ser sometidas o no a fiscalización en su organización, enseñanza y promociones. No es éste el lugar para abrir debate sobre estos asuntos.

Nuestras Universidades son todas libres y lo que se discute es la organización de las Universidades privadas. Estas existen en casi todo el mundo y, pienso, que sería deseable que las tuviéramos siempre que fueran mejores que las oficiales, cuya enseñanza presenta grandes deficiencias en el momento actual. Son una de las esperanzas para mejorar la enseñanza superior en nuestro país.

La discusión radica en el derecho de que las Universidades privadas concedan o no títulos habilitantes. En mi opinión esos títulos deben ser otorgados por el Estado, en la forma que establezcan leyes del Congreso, previo informe de las Universidades y corporaciones profesionales.

Agradeciendo el honor que se me ha dispensado, me es grato saludar a usted con mi consideración más distinguida.

Bernardo A. Houssay

RESOLUCION MINISTERIAL

Buenos Aires, 1º de abril de 1958.

VISTO:

La nota presentada por el doctor D. Bernardo Houssay, de fecha 18 de noviembre de 1957, en respuesta al requerimiento de este Ministerio, (Exp. Nº 121.341/57) y considerando la necesidad de resolver las cuestiones planteadas en la misma, como requisito previo, al cumplimiento de las tareas que incumben a la Comisión que el doctor Houssay preside en virtud del decreto Nº 3.218/56;

El Ministro Interino de Educación y Justicia

RESUELVE:

1º. — Hágase saber a la Comisión que tiene las más amplias facultades para expedirse en todo lo que concierne a las orientaciones, modalidades y texto de un anteproyecto de ley sobre organización y funcionamiento de las universidades privadas.

2º. — Proporcionése por Despacho General a la Comisión todos los antecedentes reunidos sobre el tema.

3º. — Comuníquese, anótese, regístrese, dése al Boletín de Comunicaciones y archívese.

ALBERTO MERCIER

Ministro Int. de Educación y Justicia

Exp. 62.882/58.

Buenos Aires, 1º de abril de 1958

Doctor BERNARDO HOUSSAY

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que, informado del estado de las actuaciones relativas al funcionamiento de la Comisión creada por Decreto número 3.218/56, bajo su digna presidencia, es propósito de este Ministerio, de acuerdo con los deseos y las instrucciones recibidas del Excmo. señor Presidente, seguir contando con su valiosa cooperación a fin de dar feliz término a las tareas que le fueran encomendadas.

He considerado, además, el requerimiento que formula en su atenta nota de fecha 18 de noviembre del año ppdo., y, en respuesta, cúmpleme hacerle saber que esa Comisión tiene las más amplias facultades para

expedirse en todo lo que concierne a las orientaciones, modalidades y texto de un anteproyecto de la ley sobre organización y funcionamiento de las universidades privadas.

Doy instrucciones, al mismo tiempo, para que, por medio de las reparticiones que corresponda, se proporcionen a esa Comisión todos los antecedentes reunidos sobre el tema.

Me será grato, por consiguiente, recibir el dictamen solicitado, mientras anticipo al señor Presidente de la Comisión y a sus integrantes mi reconocimiento por su cooperación, le ofrezco los sentimientos de mi más alta estima.

ALBERTO MERCIER
Ministro Int. de Educación y Justicia

**ANTEPROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO DEL ART. 28 DEL
DECRETO-LEY Nº 6.403, PREPARADO EN ABRIL DE 1956 POR EL
EX-MINISTRO DE EDUCACION DR. ATILIO DELL'ORO MAINI, QUE
FUE PASADO A LA COMISION ASESORA EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION MINISTERIAL DEL 1º DE ABRIL DE 1958**

Artículo 1º—Las universidades creadas por la iniciativa privada podrán obtener el reconocimiento del Estado cuando demuestren que reúnen —en su organización y funcionamiento— las condiciones exigidas por el presente Decreto-Ley para promover en su seno, de acuerdo con los altos intereses de la Nación, el desarrollo de las ciencias y el incremento de la cultura, y para proporcionar a los alumnos la formación científica necesaria al ejercicio de las diferentes profesiones.

Art. 2º—La universidad privada debe regir sus actividades por medio de un estatuto adecuado a la naturaleza de la labor científica y de los estudios profesionales que se propone.

Art. 3º—El estatuto de una universidad privada debe enunciar por lo menos:

- a) Las facultades, escuelas, institutos y centros de investigación científica que componen su estructura para el cumplimiento de las finalidades propias;
- b) Las asignaturas de cada grupo de enseñanza, su orden, el modo cómo deben ser impartidas, la enumeración de las materias exigidas como mínimum para obtener los diferentes títulos que expide;
- c) Las normas relativas al gobierno de la Universidad y de las respectivas escuelas, centros o institutos y, en particular, las que corresponden al carácter, composición, designación y atribuciones de sus autoridades.
- d) Las reglas de la organización del cuerpo de profesores y, particularmente, las que conciernen al número, carácter y provisión de las respectivas cátedras;
- e) Las condiciones de admisión de los alumnos; el régimen general de disciplina, los aranceles de estudio y de exámenes;
- f) El número y modalidad de los exámenes de promoción o de tesis;

- g) El sistema de becas y bolsas de estudios, ya sea en favor de los docentes para el perfeccionamiento de su profesión, ya sea en favor de los alumnos, y el de las demás obras de asistencia social universitaria;
- h) Los grados, diplomas y títulos conferidos por cada facultad, escuela o instituto;
- i) El patrimonio y las rentas de que dispone para el cumplimiento adecuado de sus fines;
- j) Las reglas de administración y control financiero de sus actividades.

Art. 4º — Las universidades privadas, reconocidas por el Estado, gozan de personalidad jurídica y de autonomía administrativa, didáctica y disciplinaria, dentro de los límites fijados por el presente decreto-ley y bajo el control permanente de los órganos establecidos para ese fin por el Ministerio de Educación. Este control tiene por objeto comprobar las relaciones de utilidad general entre los fines de la universidad privada y el bien público, y particularmente, ejercer la policía que le corresponde sobre aquellas profesiones que se practican en beneficio de terceros y que se relacionan con las buenas costumbres, la seguridad, la salubridad pública o el interés nacional explícitamente declarado por la ley.

Art. 5º — Se declaran comprendidas dentro de este control las siguientes profesiones: abogacía, notariado, medicina, odontología, farmacia, ingeniería, arquitectura, química, profesorado, veterinaria, agronomía, contabilidad. El Poder Ejecutivo puede, por medio de decreto reglamentario, modificar, dividir, complementar o aumentar dicha nómina según lo requiera el ejercicio de su derecho de policía.

Art. 6º — Los diplomas que las universidades privadas expiden por cada una de las facultades, escuelas, o institutos que las componen, con relación a los estudios correspondientes a las profesiones controladas, sólo tienen valor académico y confieren a sus titulares el derecho a presentarse al Ministerio de Educación para obtener los títulos habilitantes al ejercicio de las profesiones a que aquellos diplomas se refieren, cuando las universidades que los hubieren expedido satisfacen las condiciones exigidas por el presente decreto-ley.

Art. 7º — Las condiciones exigidas a las universidades privadas para otorgar y mantener el reconocimiento oficial y sobre cuyo cumplimiento ejerce el Estado un control permanente por intermedio del Ministerio de Educación, son las siguientes:

1. — Organizar, dentro de la unidad científica y didáctica que corresponde a la enseñanza superior, por lo menos tres de las siguientes facultades: de filosofía y letras; de derecho, de medi-

cina; de ingeniería; de arquitectura; de ciencias de la educación; de ciencias económicas; de agronomía o de veterinaria;

2. — Satisfacer, en cada una de las facultades e institutos organizados, los siguientes requisitos;

- a) Impartir en cada carrera, por lo menos, todas las disciplinas básicas obligatorias exigidas para la misma en la facultad oficial;
- b) Incluir en los planes de estudio, además de las asignaturas cuyo conocimiento es obligatorio, aquellas otras que, por su relación con la formación profesional, pueden ser objeto de la elección del alumno según su particular vocación;
- c) Asegurar el funcionamiento de un ciclo de formación cultural, algunas de cuyas materias deben ser obligatorias y otras optativas de acuerdo con la índole de los estudios de la respectiva facultad o escuela;
- d) Exigir para la admisión de los alumnos, por lo menos, las condiciones establecidas para el ingreso en la facultad oficial;
- e) Funcionar en edificios apropiados que satisfagan, según el número de alumnos admitidos en cada curso, las exigencias pedagógicas e higiénicas;
- f) Disponer de bibliotecas, instalaciones y laboratorios adecuados a la investigación científica y a la eficacia de la enseñanza;
- g) Poseer un cuerpo docente idóneo desde el punto de vista científico, pedagógico, moral y cívico;
- h) Establecer en los respectivos reglamentos el sistema para la provisión de las cátedras así como el régimen de su funcionamiento;
- i) Limitar la matrícula en cada serie de cursos de acuerdo con la capacidad didáctica de las instalaciones.

3. — Desarrollar sus actividades en consonancia con el respeto debido a las instituciones republicanas y democráticas que constituyen la base constitucional del Estado.

4. — Disponer de patrimonio y de rentas que aseguren su funcionamiento regular, y elevar periódicamente al Ministerio, a título informativo, los balances de cada ejercicio, así como todas las informaciones que oficialmente le fueran requeridas concernientes al origen de los fondos.

5. — Poseer administración y presupuesto financiero regularmente organizados.

Art. 8º — Las universidades privadas no reciben contribución del presupuesto del Estado para el cumplimiento de sus

funciones didácticas. Administran libremente sus bienes, los cuales está exentos de toda contribución, impuesto o tasa nacional, provincial o municipal, así como todos los actos jurídicos que se refieran a las mismas.

Art. 9º — Las funciones de rector, decano o cualquier otra de carácter ejecutivo en el orden didáctico serán desempeñadas por argentinos nativos que pertenezcan o hayan pertenecido al claustro de profesores de cualquiera de los institutos de la universidad. También deben ser argentinos nativos los miembros de los Consejos Directivos.

Art. 10. — El reconocimiento de las universidades privadas será requerido al Ministerio de Educación, el cual hará verificar, por medio del órgano competente, si la universidad reúne los requisitos esenciales ordenados por el presente decreto-ley. La solicitud deberá ir acompañada:

- a) De los estatutos de la universidad;
- b) De los estatutos de la Asociación o Institución que haya creado y sostenga a la universidad, si la hubiere;
- c) De los reglamentos internos de las facultades, escuelas o institutos que integran la universidad;
- d) De todos los documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones legales exigidas.

Art. 11. — El Ministerio de Educación procederá al examen de los antecedentes aportados, realizará las inspecciones que estime conveniente y, previo el dictamen del órgano competente, el Poder Ejecutivo por intermedio del mismo Ministerio, dictará el decreto de reconocimiento, inscribiendo la universidad en un registro especial en donde se anotarán en lo sucesivo todos los decretos y resoluciones concernientes a dicha universidad. El decreto de reconocimiento será comunicado a las autoridades de la universidad reconocida.

Art. 12. — Las universidades reconocidas deberán informar al Ministerio sobre todas las resoluciones que se refieran a las materias objeto del control del Estado y los informes, estadísticas y demás antecedentes que le fueran requeridos por los órganos competentes del Ministerio. Todos los años, la universidad deberá elevar al Ministerio la memoria de sus actividades, acompañada de los presupuestos y balances a que alude el artículo 7º, inciso 4.

Art. 13. — El Ministerio de Educación constituirá por cada facultad o escuela de la universidad reconocida que expida diplomas académicos, en los estudios correspondientes a cada una de las profesiones controladas, una comisión permanente de tres miembros, la cual tendrá a su cargo la fiscalización del cumplimiento por parte de las mismas de las condiciones establecidas.

Art. 14. — Las Comisiones deberán asesorar al Ministerio de Educación sobre toda solicitud que presente una universidad para abrir facultades o escuelas correspondientes a las profesiones controladas; realizar las inspecciones periódicas que reglamentariamente les incumbe sobre el funcionamiento y regularidad de los estudios; expedirse sobre los cambios y modificaciones que la universidad introduzca en el cumplimiento de las condiciones establecidas por el reconocimiento; formular las observaciones que estime convenientes y aconsejar al Ministerio las medidas encaminadas a la fiel observancia de la ley.

Art. 15. — Las comisiones estarán constituidas por un miembro designado por la Academia Nacional que corresponda a la índole de los estudios de la respectiva facultad; por un miembro designado por el Colegio o Asociación profesional del mismo carácter y por un funcionario del órgano del Estado que corresponda, según la naturaleza de aquellos estudios.

Art. 16. — Los títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones, a que se refiere el artículo 5º, serán expedidos por el Ministerio de Educación, ante el cual los interesados presentarán los diplomas que acrediten la realización de los estudios exigidos de acuerdo con los requisitos que este decreto-ley establece. Acompañarán la nómina de las asignaturas cursadas y de las clasificaciones obtenidas en las sucesivas promociones. El Ministerio de Educación, previa comprobación de que los diplomas corresponden a estudios realizados de acuerdo a las normas vigentes, registrará el diploma presentado y certificará y anotará en el mismo que se han cumplido los requisitos establecidos.

Art. 17. — El Ministerio de Educación ordenará inspecciones periódicas por medio de las respectivas comisiones de fiscalización y si a raíz de ellas o de comprobaciones de otra índole, resultare que se han modificado las condiciones por las que se hubiere otorgado el reconocimiento, intimará a la universidad, si no resultaran satisfactorios los descargos de la misma, el cumplimiento de las resoluciones que se dictaren, pudiendo el Poder Ejecutivo suspender por decreto el otorgamiento de los títulos profesionales por parte del Ministerio, hasta tanto se hubieren salvado las deficiencias comprobadas.

Art. 18. — El Ministerio de Educación dará a publicidad todos los años una información acerca de la labor desarrollada por la comisión de fiscalización y del desempeño de las tareas docentes de las Universidades privadas con relación a las actividades controladas.

Art. 19. — Por intermedio del Ministerio de Educación se dictarán oportunamente las reglamentaciones que fueren necesarias para el cumplimiento del presente decreto-ley.

Art. 20. — De forma.

DICTAMEN DE LA COMISION ASESORA

En la ciudad de Buenos Aires, el día quince de abril de mil novecientos cincuenta y ocho se reunieron los integrantes de la Comisión creada por decreto 3.218/56 que firman la presente, bajo la presidencia del Doctor Bernardo Houssay. Abierta la sesión el señor Presidente hizo conocer que había recibido por intermedio del señor Ministro de Educación y Justicia copia de la resolución dictada el 1º del corriente por la cual se dispone:

“1º — Hágase saber a la Comisión que tiene las más amplias facultades para expedirse en todo lo que concierne a las orientaciones, modalidades y texto de un anteproyecto de ley sobre “organización y funcionamiento de las universidades privadas”.

Después de un cambio de opiniones, la Comisión cree necesario dejar aclarado que la comunicación referida es la respuesta oficial al requerimiento formulado por la Comisión al Ministerio con fecha 25 de junio de 1956, conforme con el acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión excepto el Doctor José Manuel Saravia, que había renunciado, y que dice así:

“La Comisión ha tomado en cuenta que el decreto que la crea le acuerda la tarea de asesorar al Superior Gobierno sobre “la reglamentación legal de la existencia y funcionamiento de las “universidades libres creadas por la iniciativa privada de acuerdo “con lo que dispone el artículo 28 del decreto-ley 6.403/55”.

“Después de un cambio de ideas se llegó a las siguientes conclusiones:

“1º — Que el texto del artículo 28 es inconveniente por los siguientes conceptos:

“a) Porque emplea una terminología equivocada al designar “como «libres» las universidades privadas.”

“b) Porque parece acordar el derecho de fundar institutos “de enseñanza, derecho que deriva directamente de la “Constitución.”

“c) Porque parece acordar a las instituciones la facultad de “otorgar diplomas y títulos habilitantes directamente.”

“d) Porque no prevé la exigencia de que esas instituciones “no subsistan de asignaciones del Estado.”

“2º — La Comisión, en consecuencia, siente que no puede des-“arrollar una labor útil si se limita a reglamentar una disposi-

“ción cuyas ideas fundamentales no comparte, y por ello considera prudente hacer conocer esta situación al señor Ministro, para que se disponga o bien la directa derogación de dicho artículo o bien la ampliación de facultades de la Comisión, actualmente limitadas por el texto de los decretos 6.403/55 y 3.218/56, de manera que ella quede habilitada para proponer los proyectos “sobre universidades privadas con entera libertad”.

La gran demora con que se recibe la contestación referida excusa a la Comisión de expedir un informe detallado. Considera la Comisión que debiendo asumir el poder dentro de pocos días las autoridades constitucionales, no debe al presente dictarse un decreto-ley para regular una materia que debe serlo por ley del Congreso.

Ello no obstante, ante el requerimiento del señor Ministro, la Comisión no tiene inconveniente en expresar algunos principios básicos que deben orientar la legislación en esta materia, porque considera beneficioso el aporte del esfuerzo de los particulares para el desarrollo de los estudios superiores y por lo tanto la fundación de universidades privadas.

1º — Las universidades deberán promover la ampliación de los conocimientos y asegurar una educación integral y no exclusivamente profesional.

2º — La ley establecerá las condiciones que las universidades deben reunir para ser reconocidas y la forma de reconocimiento.

3º — Los institutos privados de enseñanza superior podrán adquirir la categoría de universidades siempre que dispongan de recursos propios y no subsistan de asignaciones del Estado. Deberán dar a publicidad el origen y la disposición de sus fondos, demostrando que sus actividades no se desarrollan con fines lucrativos.

4º — Su reconocimiento no autoriza la expedición de títulos profesionales habilitantes para el ejercicio de actividades reglamentadas, que es función del Estado.

5º — Los certificados parciales de estudio o los diplomas podrán ser aceptados para autorizar a su tenedor a rendir el examen de estado de habilitación profesional siempre que los estudios cursados en la institución otorgante de aquéllos reúnan las condiciones establecidas por la ley.

En vista de la importancia que se ha acordado en la consideración pública de este problema al otorgamiento de títulos profesionales, la Comisión cree prudente destacar que el propósito fundamental de una verdadera universidad consiste en la desinteresada búsqueda de conocimientos.

BERNARDO A. HOUSSAY — EDUARDO BRAUN
MENENDEZ — ALFREDO CARLOS CASARES —
VENANCIO DEULOFEU — EDUARDO M.
HUERGO — LUIS F. LELOIR — JUAN T. LEWIS
— JAIME PERRIAUX — SEBASTIAN SOLER

NOTA ACLARATORIA
DEL EX - MINISTRO Dr. ATILIO DELL'ORO MAINI
SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISION ASESORA

Buenos Aires, abril 23 de 1958.

A S. E.

DR. ALBERTO MERCIER

Ministro Interino de Educación y Justicia.

S/D.

Cumplo con el deber de poner en conocimiento de V. E., el texto de las declaraciones que hoy hago públicas, acerca del dictamen elevado a ese Ministerio por la Comisión que oportunamente fuera designada para asesorar al gobierno sobre el régimen legal de las Universidades Privadas.

Dichas declaraciones, no tienen otro objeto que el de dejar claramente establecida la unidad de criterio que existe entre las conclusiones positivas del dictamen aludido y el pensamiento originario del artículo 28 del decreto-ley 6.403/55.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. los sentimientos de mi alta consideración y estima.

Fdo.: Atilio Dell'Oro Maini

El dictamen de la Comisión designada para aconsejar al gobierno sobre la redacción del proyecto de ley reglamentaria de la organización y funcionamiento de las Universidades creadas por la iniciativa privada, cuyo reconocimiento contiene el art. 28 del decreto-ley 6.403/55, está destinado, por la importancia de sus conclusiones positivas, a tener una honda repercusión y segura eficacia en el progreso de la legislación pertinente; motivo por el cual aspiro al honor de reabrir, con la publicación de las presentes reflexiones, el saludable debate público que el interés por tan importante asunto promueve.

El aludido dictamen contiene unas observaciones al texto del art. 28 que deseo recoger en virtud de su inmediata relación con el auténtico pensamiento del gobierno que lo inspirara, públicamente conocido a través de documentos oficiales y debates en los cuales quedó perfectamente definido. Varias de esas observa-

ciones, atribuibles tal vez a la redacción un tanto escueta y sumaria del artículo 28, —destinado exclusivamente a fijar un principio—, han sido hechas en forma dubitativa entre posibles sentidos, decidiéndose la Comisión por una interpretación sobre el alcance de sus términos que olvida la dada oportunamente por el gobierno, y sugiere aparentemente una contradictoria diferencia de criterio entre los autores de la iniciativa y los eminentes asesores elegidos para aconsejar sobre su mejor ejecución. Conviene, por lo tanto, en beneficio de una obra de tan señalado interés público, anhelada por un inmenso y creciente sector de la opinión nacional, señalar la inexistencia de ese aparente desacuerdo y la unidad fundamental de tan valioso dictamen con el pensamiento originario de la aludida disposición.

Dejo de lado, deliberadamente, cualquiera consideración que no vaya dirigida a esta finalidad. Considero de mi deber, por la responsabilidad personal que me incumbe y por lealtad a aquel sector que diera su adhesión al artículo 28, salvaguardar la verdad de la concepción a que responde, e invocar, en su apoyo, aquellos documentos oficiales en que oportunamente fuera expuesta.

Las objeciones formuladas por la Comisión al art. 28, son las siguientes: que usa la expresión universidades libres por la de universidades privadas; que parece acordar un derecho que deriva directamente de la Constitución; que omite la prohibición de que estas universidades subsistan de asignaciones del Estado; que parece facultar a las mismas para expedir títulos profesionales a sus alumnos. Por causa de estas objeciones, la Comisión se ha sentido trabada en su desempeño, considerando que no podía reglamentar una disposición cuyas ideas fundamentales no comparte.

Deploro, en primer término, no coincidir con los ilustrados miembros de la Comisión acerca del alcance atribuido a sus objeciones en relación con las funciones de su incumbencia. Ellas no consistían, ni podían consistir, en reglamentar el art. 28, sino en aconsejar al gobierno sobre la redacción de un proyecto de decreto-ley en la materia; no se hallaba, por consiguiente, en la situación de un poder ejecutivo que no puede apartarse de la ley cuando la reglamenta; su misión, de simple asesoramiento, le permitía, pues, si era el caso, recomendar la modificación o sustitución del mencionado artículo, sin que la redacción de éste fuera obstáculo alguno a su cometido. Resulta ésto tanto más claro para mí, cuanto más considero en sí mismas las objeciones presentadas. Veamos: la expresión de "universidades libres creadas por la iniciativa privada" hace referencia a un concepto universalmente corriente sobre la justa independencia de las mismas, y su empleo, en lugar de "universidades privadas", no contradice ni oscurece la finalidad del artículo. Tampoco resulta evidente,

ni compromete el sentido del artículo, la sospecha de que el mismo se sustituye a la Constitución, otorgando un derecho que ésta ya concede; y por el contrario, me parece que tiende a que no permanezca ilusoria la verdad de ese reconocimiento. En cuanto al sostenimiento financiero del Estado, el silencio del artículo a su respecto no significa que lo admita, o lo rechace, siendo insuficiente, a mi juicio, esta razón para paralizar un consejo en uno u otro sentido. Y, por último, en lo que concierne al otorgamiento de títulos habilitantes, el artículo remite su validez al cumplimiento de las condiciones impuestas por la ley que se dictará oportunamente, materia sobre la cual —precisamente—, debía dictaminar la Comisión.

Debo agregar que, por mi parte, di reiteradamente a la Comisión el más amplio reconocimiento de su libertad y de sus facultades para pronunciarse. Recibí una consulta verbal de su dignísimo Presidente y la evacué de la misma manera. Después de mi renuncia, la Comisión creyó que no podía proseguir sus tareas sin una comunicación escrita que ratificara aquel reconocimiento. Lamento de veras este escrúpulo de los señores asesores. No creo que, bajo ese aspecto, tenga tanta importancia el cambio de un ministro. El reconocimiento de aquella libertad y de sus amplias facultades no era un acto de cortesía del ministro que, por razones personales puede variar, sino la consecuencia de un acto de gobierno que había definido ante la Junta Consultiva Nacional el verdadero alcance y significación del artículo 28. En este punto se concentra, precisamente, todo el sentido de la presente aclaración: las objeciones formuladas en el seno de la Comisión se encuentran satisfechas, por anticipado, en las conclusiones de aquel debate, y el pensamiento que inspira el asesoramiento dado hoy por la misma coincide, en su letra y en su espíritu, con el que, en mi calidad de ministro, sostuviera en aquella oportunidad.

Para comprobar tal verdad, rehuyo todo argumento que hoy pudiera articular después de conocido el dictamen, y me remito —para mayor objetividad— a los documentos oficiales producidos cuando aún no se había constituido la Comisión.

En el debate de la Junta, a que aludo más arriba, precisé con claridad el criterio con que el gobierno interpretaba la eventual aplicación del artículo 28. Todo el razonamiento partía de considerar a la universidad, cualquiera fuera su origen, como una comunidad de profesores y alumnos, constituida espontáneamente por razón de vínculos que nacen de su libre elección, para el acrecentamiento de las ciencias por la investigación de la verdad, y para la formación integral de la personalidad en el grado de la enseñanza superior. Señalé entonces, que el decreto-ley que contiene aquel artículo, instituía en todo el país el régimen de la universidad libre, aplicable tanto a las universidades del Estado

como a las nacidas de la actividad privada. En la Argentina —de-
cía— no habrá más que universidades libres, divididas en dos
categorías: la universidad libre del Estado que recibe los dineros
de la Nación, y la universidad libre de la iniciativa privada que
no los recibe.

De acuerdo con estas ideas quedaron asentadas, en aquella
oportunidad, las siguientes proposiciones, síntesis del pensamien-
to del gobierno sobre la materia:

- 1º) La ley reglamentaria debe tener en cuenta la salvaguar-
dia de los legítimos intereses del bien común y, particu-
larmente, el respeto de las instituciones republicanas
y democráticas que constituyen la base constitucional
del Estado;
- 2º) La misma ley debe tender a la constitución de universi-
dades auténticas y de gran valor científico, que se en-
cuentren en condiciones de ofrecer a la cultura del país,
métodos y estructuras originales, capaces de acrecen-
tarla y renovarla;
- 3º) Las universidades a que se refiere el artículo 28, se
constituirán con los fondos que proporcione la iniciativa
privada, y no podrán recibir subsidios o asignaciones
del presupuesto del Estado;
- 4º) Debe establecerse en la ley un procedimiento de control
sobre el origen de los fondos que reciba la Universidad
privada;
- 5º) Los títulos profesionales que expidan dichas universi-
dades serán sometidos, para su validez, al control y al
examen de los órganos competentes del Estado, de acuer-
do con lo que establezca explícitamente la ley reglamen-
taria.

Estas proposiciones, espontáneamente ofrecidas por el mi-
nistro, como expresión del pensamiento originario e invariable
del gobierno, fueron consideradas satisfactorias por los honora-
bles consejeros de los diferentes partidos políticos que participa-
ron en el debate y pasaron a ser, según declaración oficial, la
base de los trabajos encomendados a la Comisión designada. ("La
Revolución Libertadora y la Universidad". Publicación del Minis-
terio de Educación y Justicia, 1955-1957. Debate en la Junta Con-
sultiva, 28 de febrero de 1956; págs. 100 y 166. Discurso radial
del 2 de marzo de 1956; pág. 172).

Para mayor abundamiento —y a simple título recordativo—,
quiero agregar que ha quedado en los archivos del Ministerio un
anteproyecto sobre la organización y el funcionamiento de las
Universidades privadas, que recoge todos estos principios, y con
el cual me proponía ofrecer mi modesta colaboración a los tra-
bajos de la Comisión.

Basta una simple lectura comparativa para comprobar la identidad total de las conclusiones. El dictamen de la Comisión ratifica plenamente todas estas ideas y no ha avanzado más allá de lo que ellas traducen y recomiendan. No existen, pues, entre los testimonios aludidos —dados en favor de la Universidad privada— tendencias divergentes ni desacuerdos sobre su naturaleza, su funcionamiento y su control. La aparente contradicción sólo viene de no haber utilizado los esclarecimientos ya producidos en el seno de la Junta con la conformidad de todos los sectores.

Para concluir —y después de dejar asentada esta coincidencia fundamental de criterio en que me apoyo para bregar por la ejecución final de la iniciativa— deseo manifestar la necesidad de seguir examinando con rigor este tema, con el objeto de lograr la exacta determinación de aquellas condiciones técnicas y científicas que aseguren en las universidades que aspiran el reconocimiento oficial, la existencia de una verdadera capacidad para promover en su seno, de acuerdo con los altos intereses de la Nación, el desarrollo de las ciencias y el incremento de la cultura, y para proporcionar a los alumnos la formación científica necesaria al ejercicio de las diferentes profesiones.

En obsequio a estos fines, aspiro a que se encuentre el modo de que la misma Comisión prosiga sus tareas de asesoramiento para que, salvadas las dificultades con que ha tropezado, pueda proporcionarnos todo cuanto había derecho a esperar de su reconocida autoridad y competencia.